**Crisis neoliberal en Argentina**

Por Francisco Cantamutto.

Desde que llegó al gobierno en diciembre de 2015, Cambiemos representó el programa económico que unifica los intereses de los capitales más concentrados. Una política que se emparenta con la de la última dictadura, cuyo 43° aniversario se cumple al momento de escribir estas líneas.

Esto significa que se ponen en un segundo orden las demandas sectoriales, y que los estratos menos concentrados del capital y las clases populares directamente se relegan. Ambos puntos se distinguen de la estrategia política del gobierno anterior, que incurría en diversas transferencias para legitimar la acumulación. El costo de aquella estrategia se elevó en la medida que la crisis mundial no encontró resolución, a lo cual se sumaron las tensiones nacionales emergentes del conflicto de 2008. En la construcción de un proyecto de oposición al kirchnerismo convergieron diversas fracciones del poder económico, utilizando foros como el Coloquio de IDEA, la Asociación Empresaria Argentina y el Foro de Convergencia Económica. Confluyendo en esta lid se presentaron diversos partidos políticos, entre los cuales destacó la coalición Cambiemos, que resultaría ganadora de las elecciones de 2015 –y que dio un lugar muy encumbrado al empresariado dentro de su gabinete.

La crítica reposaba sobre el viejo guión neoliberal del supuesto exceso de intervención del Estado, que se evaluaba costosa en relación a sus beneficios. Sin embargo, si Cambiemos quería ganar elecciones, no podía atacar expresamente las transferencias, por lo cual optó por vaciar el discurso de todo contenido concreto, enfocando más bien en emociones –táctica conocida como de posverdad.

Una vez en el gobierno, se hizo claro que se trataba de un programa neoliberal. La quita de trabas e impuestos a los movimientos de capitales y mercancías estuvo al tope de la agenda, sometiendo al país a los vaivenes de la economía mundial. La brutal caída de la participación asalariada en el ingreso nacional se logró por la vía inflacionaria: se estima que para febrero de 2019 el salario promedio perdió más de un 15% de poder adquisitivo. Las funciones del Estado fueron perfeccionadas en favor de los capitales más concentrados, con especial énfasis en la operatoria financiera. Esto se vislumbra en el temprano arreglo con los “fondos buitres” (marzo de 2016), que inició una veloz carrera de endeudamiento –récord en el mundo- que superó los 163.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a un insostenible 105%.

El gobierno avanzó también en reformas como la tributaria y la previsional, además de promover un asombroso blanqueo de capitales y habilitar las participaciones público-privadas como alternativa a la obra pública. Negociando con sectores de la oposición en el Congreso y abusando de los decretos presidenciales, logró obtener varias de las reformas buscadas.

**Un esquema insostenible**

Con todo, el gobierno de Cambiemos avanzó más lento de lo que buscaba. Las movilizaciones multisectoriales de 2016 le impusieron un ritmo más lento al tarifazo de los servicios públicos, que en lugar de alcanzar los valores buscados de un solo golpe, debieron dilatarse durante todo el mandato. De este modo, las tarifas siguen aumentando de manera dilatada (¡y en dólares!) hasta la fecha, alimentando la inflación: la suba de precios alcanzó el 48% en 2018, y ya está superando el 10% en el primer trimestre de 2019.

El alza en la inflación expresa las dificultades para redefinir un esquema estable de precios relativos, que reparta los ingresos de cierta forma específica. Al respecto, aunque algunas excepciones sectoriales han impedido mayor ajuste (por ejemplo, bancarios o aceiteros), las centrales sindicales no han reaccionado a la altura de la ofensiva, dilatando medidas de fuerza contundentes. La cadena productiva ha trasladado el alza del costo a precios, alimentando la inflación, pero chocando con la apertura comercial, que abarata los bienes importados. Atrapada en esta pinza de costos en alza y apertura externa, la industria se encuentra operando a un 56% de su capacidad instalada, con casos abrumadores como el sector automotriz que usa apenas el 15,7% de su capacidad total. Por supuesto, esto ha provocado una auténtica crisis entre las PYMEs, principales creadoras de empleo en el país.

Sin trabas a los movimientos de capitales, la suba de precios ejerce presión directa sobre el dólar. Cambiemos asumió con un dólar a $9,70 que rápidamente devaluó a $14, y de allí dejó subir lentamente hasta los $18 a fines de 2017. Durante esos dos años, la clave para morigerar la devaluación fue la atracción de capitales especulativos mediante títulos públicos de alto rendimiento. La estrella del esquema fueron las Letras del Banco Central (LEBAC), un título de corto plazo (la maduración promedio era de unos 40-50 días), que permitía rápido ingreso y salida. Tras alcanzar un tope de 38% de interés a principios de 2016, el rendimiento fue decreciendo, hasta un piso de 23% un año más tarde: una tasa que permaneció elevada en términos internacionales, que hizo de la Argentina la meca mundial del *carry trade* durante 2016. Para abril de 2018, el stock total de esta deuda de corto plazo empató a la base monetaria, es decir, equivalía a todos los billetes y monedas circulando, pero devengando altos intereses. La lógica de renovación permanente de deuda de corto plazo era una trampa evidente, que no tardaría en mostrar su debilidad.

La recesión ha sido el resultado obvio de este proceso. Desde que Cambiemos asumió, solo en 2017 mostró algunos signos positivos de reactivación, básicamente resultantes del impulso a la obra pública y los créditos para el consumo. Ambos casos estaban ligados a las necesidades de un año donde se elegían representantes en el poder legislativo, en las que el gobierno salió victorioso. Ahora bien, este pulmotor electoral no duraría mucho. Esa clase de tasas de interés y cortoplacismo no son compatibles con la producción. En 2018, Argentina terminaría siendo el país con la segunda mayor caída del mundo en su PBI.

**Del gradualismo al shock**

A partir de abril de 2018, la endeblez del esquema de valorización financiera se enfrentó a movimientos adversos de capitales a nivel mundial, habiendo perdido todas sus armas. La única respuesta del gobierno fue elevar las tasas de interés, que saltaron rápidamente al 47% anual. Esto no evitó que una gran parte de los capitales decidiera no renovar sus posiciones, y pasara sus tenencias a dólares, presionando sobre el tipo de cambio. Las corridas cambiarias se sucedieron hasta junio, llevando el dólar a $28. La fuga de capitales de esa primera mitad de año fue de 16.676 millones de dólares.

Por la magnitud de la crisis, y sin alternativas propias para resolver la crisis, el gobierno argentino recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una década y media del último préstamo. Se pactó un acuerdo *stand by* –el más cargado de condicionalidades- por más de 50.000 millones de dólares, que luego serían ampliados en un 15%. En lo general, los pedidos del FMI no eran novedosos: ajuste fiscal (llegar al déficit cero) y reformas estructurales (laboral, previsional, del Banco Central). Aprendiendo de crisis pasadas, el organismo aceptaba el uso de parte de los fondos para compensar a los sectores más vulnerados, de modo de contener parte del descontento. El gobierno tomó el libreto, que era apenas una versión más intensa de lo que venía haciendo. Esto, claro, provocó mayores tensiones políticas.

Claro está, esto no resolvió los fundamentos de la crisis. La fuga de capitales persistió y la actividad siguió en caída. El tipo de cambio alcanzó los $38 por dólar. Una revisión del acuerdo en octubre de 2018, mostrando la tozudez de la ideología, produjo una mayor quita de instrumentos de política, al impedir que el Banco Central emita dinero para financiar al Tesoro (reforzando el ajuste) o venda dólares (facilitando la fuga). Aunque carezca de toda racionalidad, para desarmar la “bomba” de las LEBAC, se impulsó otro instrumento llamado LELIQ de más corto plazo (7 días) con tasas de interés más altas (alcanzaron el 74% anual), pero que solo podía estar en manos de bancos.

Esto indujo a una nueva y más frágil reedición de la experiencia previa a las corridas, para lo cual los rendimientos eran aún más altos (e insostenibles). Apenas el mercado cambiario mostró alguna calma, se intentó bajar la tasa de interés, lo que produjo nuevas presiones de salida. El dólar ha oscilado en 2019 entre los $38 y $43, ocasionando temor y dudas generalizadas, razón por la cual el gobierno subió la tasa de interés del “piso” de 45% en febrero al 67% en marzo. Como se ve, se trata de una ruleta de cortísimo plazo, muy onerosa para el país.

A esta fragilidad financiera y cambiaria local, se añade el escenario de débil crecimiento mundial y la retracción de capitales hacia las economías centrales. Como si esto fuera poco, se suma que 2019 es año de elecciones presidenciales (y de gran cantidad de provincias), lo que agrega incertidumbre política, retroalimentando la inestabilidad económica. Todo en este panorama apunta a una crisis de mayor escala, que puede estallar durante en cualquier momento.

Es posible que el apoyo diplomático y económico del FMI (con Estados Unidos detrás) decida sostener a Cambiemos hasta el final, y en ese caso, la trampa pueda dilatarse, pesando sobre el gobierno que asuma en diciembre –sea cual sea. En cualquier caso, el legado será de una deuda impagable con una economía paralizada, y el conjunto de las clases populares con cada vez mayores necesidades.